



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

Magistrado

Proceso: Ejecutivo  
Demandante: DIEGO ALEJANDRO PÉREZ GIL  
Demandado: SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE  
Radicado: 050013103008201900288 01  
Decisión: Confirma sentencia  
Sentencia Nro. 031

**TRIBUNAL SUPERIOR**  
**SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**  
**Medellín, doce de octubre de dos mil veintiuno**

Se procede a decidir por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, el recurso de apelación interpuesto por la demandada frente a la sentencia del 10 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso Ejecutivo instaurado por DIEGO ALEJANDRO PÉREZ GIL en contra de SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE.

**I. ANTECEDENTES**

1º. Pretende la parte demandante que se libere mandamiento de pago a su favor y en contra de la demandada, por las siguientes sumas:  
**\*\$45.700.000** como capital más los intereses moratorios desde el 27 de noviembre de 2018 hasta el pago total. La suma de  
**\*\$6.000.000** como capital, más los intereses moratorios desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el pago total. La suma de  
**\*\$55.800.000** como capital más los intereses moratorios desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el pago total. La suma de  
**\*\$98.050.000** como capital más los intereses moratorios desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el pago total. La suma de

**\*\$18.600.000** como capital más los intereses moratorios desde el 14 de enero de 2019 hasta el pago total. La suma de **\*\$50.400.000** como capital más los intereses moratorios desde el 18 de enero de 2019 hasta el pago total. Cada una de las obligaciones están contenidas en letras de cambio y los intereses de mora se cobrarán a la tasa máxima certificada por la Superbancaria y la condena en costas.

2. Como sustrato de sus pedimentos, adujo los planteamientos que el Despacho así compendia:

**a)** La señora SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE en su condición de comerciante activa, acudió donde el demandante en busca de obtener crédito personal y lo hizo en diferentes ocasiones, dado que éste se dedica a la actividad mercantil de préstamo de dinero y en dichas operaciones mercantiles obtuvo recursos por valor de \$274.550.000 de capital, dinero respaldado mediante la suscripción de 6 letras de cambio.

**b)** El día 27 de octubre de 2018, el demandante le efectuó a la demandada un primer crédito por valor de \$45.700.000 para lo cual suscribió en garantía una letra de cambio pagadera a 30 días y además solicitó sumas adicionales para las supuestas inversiones que realizaría hasta completar el valor indicado en las pretensiones. A la fecha de presentación de la demanda, no se han cancelado las obligaciones, adeudando capital más intereses. De los títulos allegados se desprenden obligaciones claras, expresas, líquidas y exigibles.

3. **TRÁMITE.** Mediante auto del 20 de junio del 2019, se libró mandamiento de pago y se ordena emplazar a la demandada y surtido el trámite, la señora SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE a través de apoderado se notifica y propone como excepciones de

mérito: Nulidad relativa por vicio del consentimiento -fuerza- conforme a los artículos 1741 CC y 900 del C. Cio, solución o pago efectivo y cobro de lo no debido.

## II. LA SENTENCIA APELADA

4. Mediante providencia del 10 de marzo de 2021 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, consideró que *analizado el material probatorio allegado, es viable advertir que existen elementos que demuestran el desembolso de las sumas entre las partes, la confesión de la demandada reconociendo el incumplimiento y que sí se debían dineros, pero que era diferente a lo reclamado, pero cuando fue indagada sobre el monto, no supo decir cuánto era. Es claro que la señora Sandra dijo que ella recibía dineros, no lo negó, incluso en el mes de diciembre incumplió. Las letras tienen un origen causal en los dineros que recibió del señor Diego y su rentabilidad y los valores que dice no deber la demandada, no quedaron acreditados. Si el deudor presenta excepciones tiene la carga de probarlas, máxime cuando el título es autónomo. De las pruebas allegadas se concluye que la literalidad del título no fue desvirtuada, no se desconoció la firma, reconoció la existencia de la obligación que difiere solo en el monto. Existe una acreencia en favor del demandante y la ejecutada es la obligada directa. Desde la creación del título fue eficaz. Por lo tanto, declara no probadas las excepciones propuestas, ordena seguir adelante la ejecución en la forma indicada en el mandamiento de pago, ordena el remate, la liquidación del crédito y la condena en costas a la demandada.*

## III. LA IMPUGNACIÓN

5. Inconforme con la decisión, la parte demandada formuló apelación presentando los reparos en forma oportuna y la sustentación en el término concedido en esta instancia. En los reparos manifiesta: **1º\***. *Nulidad por la causal contemplada en el artículo 133-5 del CGP al omitir la práctica de una prueba debidamente decretada, con respecto al testigo MANUEL EDUARDO ESPINEL VALENCIA, prueba decretada como testigo común. El despacho lo dio ilegalmente desistido sin facultades para ello, argumentando que las partes no cumplieron los deberes de los artículos 78 y 217 ibidem y además porque no había espacio en la agenda y dio por desistida la prueba de oficio decretada.* **2º\***.

*Frente a las excepciones propuestas se erró en el mérito individual asignado los interrogatorios y al analizar la prueba en conjunto. De haberse valorado de acuerdo a la sana crítica se hubiera dado una hipótesis distinta para declarar probadas las excepciones. La prueba documental permite inferir que los títulos base de ejecución se firmaron por la demandada el mismo día y bajo el influjo de la fuerza. Se cobran 6 títulos por \$274.500.000 y solo se allegaron 6 consignaciones y un recibo por \$175.600.000 sin contar que se acreditó que la demandada cumplió con los pagos los primeros 3 contratos de mutuo; abonó \$40.000.000 de un préstamo que nunca recibió relacionado con un vehículo y una hipoteca por valor de \$150.000.000 en favor de un tercero y que afirma suscribió la hipoteca para salvaguardar la vida de su amiga SANDRA MONTOYA MONSALVE.*

*En la **sustentación** hace énfasis en que faltó valoración probatoria con respecto a los interrogatorios y la prueba allegada y confrontando la aseveración que hizo el despacho sustentada en una providencia de la Corte Suprema de Justicia donde se indica que fue la parte demandada la que no cumplió la carga que le correspondía, considera que el yerro consistió en la no valoración conjunta de la prueba, porque se cuenta con el interrogatorio absuelto por la demandada, en la que afirma haber sido constreñida para suscribir dichos títulos; es que llama la atención que dichas letras hayan sido firmadas en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar (el 14 de diciembre de 2018 en el centro comercial Santa fe de Medellín), aunque se hubieran anotado en cada una fechas de emisión distintas; los montos no se corresponden con los contratos de mutuo celebrados entre las partes con los que según el demandante, los títulos cobrados tienen nexo causal; tampoco, con los recibos que ofreció el demandante al descorrer las excepciones de mérito.*

*La prueba practicada en su conjunto permitía al Despacho concluir que el testimonio de la demandada corresponde con la verdad; es decir, que firmó los títulos base de ejecución bajo presión, amenaza y/o constreñimiento ilegal por parte del demandante, por lo que se debió declarar probada la excepción de nulidad relativa. Es que la demandada acepta la existencia de unos negocios anteriores consistentes en la celebración de unos contratos de mutuo que el propio demandante allegó al expediente; también aceptó haber incumplido algunos de ellos y por lo tanto, reconoce deber al demandante algunos saldos insolutos, obligación que debió el demandante perseguir con base en dichos contratos y a través del proceso verbal, el mismo que quiso evitarse acudiendo a la fuerza como en efecto lo hizo al hacerle firmar a la demandada, contra su voluntad y bajo violencia, las letras de cambio que aquí se cobran. Termina el escrito solicitando se revoque la decisión.*

Se allegó escrito por parte del no apelante, indicando que *quedó demostrado que la señora SANDRA MONTTOYA acudió en varias ocasiones, donde el señor DIEGO PÉREZ buscando obtener un crédito personal, dado que éste se dedica a la actividad de prestamista, obteniendo la suma de \$274.550.000 respaldado en 6 letras de cambio que fueron reconocidas en juicio por la demandada, que además trató de evadir la obligación, argumentando situaciones sin fundamento y sin demostrar pago conforme lo exige la legislación, proponiendo excepciones que no probó, porque eran carentes de toda realidad como se demostró con los interrogatorios.*

*La supuesta nulidad por fuerza quedó desvirtuada al revisar los tiempos en que supuestamente se había formulado la denuncia en contra del demandante. Los títulos se suscribieron para el pago de parte de obligaciones adeudadas e igualmente constituyó una hipoteca cerrada con un predio de un tercero para garantizar el pago de algunas de las acreencias al demandante, las cuales fueron presentadas al cobro. Termina el escrito indicando que la parte demandada no realizó los esfuerzos probatorios correspondientes para desvirtuar las pretensiones legítimas de la demanda y por tanto, solicita confirmar la sentencia.*

#### **IV. CONSIDERACIONES**

6. Al no advertirse ningún vicio que pueda invalidar lo actuado y al estar cabalmente satisfechos los presupuestos procesales, se procede a definir el mérito del asunto. Conforme a la competencia restringida del superior en sede de apelación, prevista en el artículo 328 del CGP, habida cuenta que el recurso de apelación fue formulado únicamente por la parte demandada, está limitada la competencia al estudio de los temas que fueron propuestos por el recurrente al sustentar el recurso de apelación.

**7. PROBLEMA JURÍDICO.** Se concreta en determinar si asistió razón al A quo al declarar imprósperas las excepciones formuladas, ordenando seguir adelante con la ejecución en la forma planteada, o por el contrario, faltó análisis al contenido de las excepciones, la prueba documental, testimonial y los interrogatorios, para determinar que la demandada fue coaccionada por un vicio del

consentimiento, concretamente la fuerza, que la llevaron a la suscripción de las letras de cambio que son la base del recaudo y bajo ese escenario, prosperaría la excepción revocando la decisión como lo pretende la parte demandada.

8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 422 del C.G.P, por vía ejecutiva se pueden demandar las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él. Ahora bien, según el contenido de los artículos 164 y 167 ibidem, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso e incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Cuando se trata de procesos de ejecución, se parte de la base de la certeza de la obligación que se pretende hacer efectiva; es así como la parte demandante, tenedora del documento en que conste la misma, queda exonerada de la carga probatoria que le imponen las normas en mención, le basta allegar el título para que sus pretensiones se vean establecidas. En cambio, el accionado debe proponer y probar los hechos fundamento de las excepciones tendientes a enervar la acción.

9. En sentencia emitida por la H. CORTE CONSTITUCIONAL<sup>1</sup> se dijo:

*"El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como los documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora". A partir de esa definición legal, la doctrina mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de los títulos valores son: **La incorporación** significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título y conforme a la ley de circulación ... **La literalidad**, en cambio, está relacionada con la condición que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado. Por ende, serán esas condiciones literales las que definan el contenido crediticio del título valor, sin que*

---

<sup>1</sup> T. 310 de 1999. M.P. LUIS ERNESTO VANEGAS SILVA.

resulten oponibles aquellas declaraciones extracartulares, que no consten en el cuerpo del mismo....**La legitimación** es una característica propia del título valor, según la cual el tenedor del mismo se encuentra jurídicamente habilitado para exigir, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación crediticia contenida en el documento, conforme a las condiciones de literalidad e incorporación antes descritas.

10. En consonancia con lo expuesto, la Sala de Casación Civil ha establecido que “... **el poseedor del título, amparado por la apariencia de titularidad que le proporciona la circunstancia de ser su tenedor en debida forma, está facultado, frente a la persona que se obligó a través de la suscripción, para exigirle el cumplimiento de lo debido.**”<sup>[451]</sup>... La legitimación consiste, pues, en la posibilidad de que se ejercite el derecho por el tenedor, aun cuando no sea en realidad el titular jurídico del derecho conforme a las normas del derecho común.

...A su vez, estas consideraciones resultan armónicas con lo preceptuado por el artículo 627 del Código de Comercio, el cual dispone que **“Todo suscriptor de un título valor se obligará autónomamente...**Por ende, los títulos valores, revestidos de las condiciones de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía, constituyen títulos ejecutivos por antonomasia, en tanto contienen obligaciones cartulares, que en sí mismas consideradas **conforman prueba suficiente de la existencia del derecho de crédito** y, en consecuencia, de la exigibilidad judicial del mismo. Bajo esta lógica el artículo 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad de la acción cambiaria a favor del tenedor legítimo del título valor, para que pueda reclamar el pago del importe del título, los intereses moratorios desde el día del vencimiento, los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia de una plaza a otra, si a ello hubiera lugar. ...”. (resaltos fuera del texto).

11. Descendiendo al caso concreto, fueron allegadas al plenario 6 letras de cambio, con fechas de creación 27 y 28 de octubre, 14 y 28 de noviembre, 14 y 18 de diciembre todas del 2018, para ser canceladas al mes siguiente de cada fecha citada, en los cuales la señora SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE aparece como deudora en favor del señor DIEGO ALEJANDRO PÉREZ GIL por las sumas de \$45.700.000, \$6.000.000, \$55.800.000, \$98.050.000,

\$18.600.000 y \$50.400.000 respectivamente, para una suma total de \$274.550.000.

12. Teniendo como base de recaudo los títulos valores referenciados, se libró mandamiento de pago en la forma solicitada y en el término del traslado, la demandada MONTOYA MONSALVE propuso varias excepciones tendientes a enervar la acción, las que fueron enunciadas como NULIDAD RELATIVA POR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO -FUERZA-, PAGO y COBRO DE LO NO DEBIDO y tanto en dicho escrito como en el de impugnación, la obligación no es desconocida, pero se advierte que los títulos fueron llenados bajo presión y amenazas por parte del demandante y que los valores cobrados no coinciden con los contratos allegados.

Es necesario entonces analizar la documentación y la reglamentación existente para el caso, tomando como fundamento el artículo 626 del Código de Comercio, que establece que el **suscriptor de un título valor** queda obligado conforme al tenor literal del mismo, precepto que determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el documento, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos allí consignados y hacer valer la garantía que ostenta el escrito, de donde se desprende que frente a la acción cambiaria, ejercida en pos de la mentada literalidad, proceden las excepciones que consagra la norma 784 de la legislación mercantil, envolviendo a aquellas que atañen al desconocimiento del contrato que supuestamente le sirvió de causa al primero (que no fue el caso) o a pagos parciales o totales del crédito, **pero ellas, cualquiera que se proponga, deben ser acreditadas fehacientemente para poder derrumbar la eficacia crediticia que obtienen los títulos valores con la firma estampada en ellos y la entrega con la intención de negociabilidad** (art. 625 del C. de Co).



13. Es decir, si las letras de cambio contienen en su texto los presupuestos de forma que contempla la ley, adquieren el carácter de plena prueba de la obligación allí vertida y del derecho puntual que le asiste a su tenedor para hacerlo valer por la vía ejecutiva. Y el argumento se aplica también en lo tocante al pago, ya total, ora parcial, toda vez que éste debe constar en el título para poder prosperar, o al anexo de una prueba irrefutable o algún recibo de cancelación que se hubiese expedido y, en gracia de discusión, el testimonio de alguien a quien le conste la aludida solución, pero, eso sí, siempre que de su versión se desprenda la obligación objeto de pago, la cantidad sufragada, la persona que entregó el dinero y el sujeto que lo recibió, como quiera que, la cancelación debe hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 del C. C.), al acreedor (art. 1634 del C. C.), en el lugar designado en la convención (art. 1645 del C. C.), comprendiendo éste el capital, los intereses y demás indemnizaciones (art. 1649 del C. C.). Luego, sin una prueba de la manera anunciada, abrirá paso el cobro.

Para dilucidar el problema jurídico planteado respecto a la nulidad por vicios del consentimiento, preciso es hacer somera referencia sobre lo que señala el Art. 1740 del CC: *"Es nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes...La nulidad puede ser absoluta o relativa"*, siendo importante anotar que la nulidad se reduce a prohibiciones a la libertad de contratación y autonomía privada que se ha consagrado en protección del interés general y que produce efectos como los de devolver las cosas a su estado inicial, lo que trae como consecuencia la cancelación de registros o restituciones de bienes etc.

14. Refiriéndose al tema concreto que da sustento a las excepciones, la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<sup>2</sup> ha indicado:

**“CIRCUNSTANCIAS QUE VICIAN EL CONSENTIMIENTO:** *El artículo 1502 del Código Civil dispone que para que una persona se obligue a otra por acto o declaración de voluntad requiere ser legalmente capaz; haber consentido en dicho acto mediando declaración que «no adolezca de vicio»; que el acto recaiga sobre un objeto lícito, y el mismo tenga causa lícita...El artículo 1508 ibidem, dispone que el consentimiento puede afectarse por vicios tales como la fuerza, el error y el dolo dado que aquél debe ser libre y espontáneo para constituir válidamente el convenio. ...«[L] ... para todo acto jurídico no solamente se requiere que los agentes otorguen voluntariamente su consentimiento, sino que también se exige que lo hagan con cierto grado de conciencia y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, pero queda viciado de nulidad; es decir, que no adolezca de ciertos vicios, cuya presencia destruye esa libertad y conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas<sup>3</sup>.*

**...La fuerza como vicio del consentimiento:** *La fuerza, al igual que los otros eventos constitutivos de vicios del consentimiento, da lugar a la nulidad relativa de contrato, según el artículo 1513 del Código Civil, en concordancia con el 1741 de la misma obra... En ese orden, se considera «como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave» (art . 151 3 de l C.C.) ... Ahora , conforme al artículo 1514 ibidem, para que la fuerza vicie el consentimiento «no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento», lo cual significa que se genera el vicio cuando se ejerce con las características anotadas, con el objetivo de «obtener el consentimiento» en el negocio respectivo .*

*«La definición descriptiva y casuística de los artículos 1513 y 1514 no es obstáculo para que se estime que la intimidación, esto es, la violencia moral, debe implicar una amenaza contraria a derecho en virtud de la cual uno haya sido determinado a prestar su consentimiento. En el concepto mismo de fuerza se halla implícito el que el temor bajo cuyo imperio consentimos resulte de hechos cumplidos con la intención de provocar un acto jurídico. Esto último es condición necesaria para la existencia de este vicio de la voluntad.... De ahí que*

<sup>2</sup> Sentencia SC1681-2019. 15 D EMAYO DE 2019. M.P. LUIS ALONSO RICO PUERTA

<sup>3</sup> Sentencia sala de casación civil 11 e abril de 2000. Expediente 5410

*para que exista **vicio del consentimiento por violencia moral se requiera, además del nexo causal y no ocasional entre la amenaza y el consentimiento, que el mal futuro en cuyo anuncio, aun cuando sea embozado, estriba aquella, se presente, para su realización como dependiendo en algún modo del poder del que amenaza.***<sup>4</sup>.

**Consecuencia jurídica de los vicios del acto:** *El legislador ha consagrado el error, el dolo y a fuera como vicios del consentimiento, razón por la cual, conforme prevén los artículos 1741 y 174 3 de Código Civil, los afectados pueden solicitar la declaración de la nulidad relativa del acto o contrato, cuando estimen acreditada su configuración. Adicionalmente , los interesados en la invalidez deben probar los hechos que la sustentan, dado que, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y 1516 del Código Civil , «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.»... **Por consiguiente, si se alega que se consintió en una compraventa mediada por fuerza física o moral, debe demostrarse la violencia y su conexidad con el negocio celebrado en esas condiciones**” .*

15. Antes de adentrarnos en el estudio del problema planteado, es necesario poner de presente que los reparos concretos que se hacen a la sentencia, como uno de los cambios que introdujo el CGP al momento de interponerse el recurso de apelación, es un requisito adicional, consistente en exponer los reparos que la parte pretende enrostrar **como error a la decisión** que considera adversa a sus intereses, es por esto que sobre ello versa la sustentación y permite a la segunda instancia decidir; aclaración que se hace para indicar que no es procedente atender la manifestación que hace el apoderado en su escrito de sustentación, cuando enuncia en el primer numeral como reparo, una nulidad por la omisión de la práctica de una prueba que en su sentir no se acogió, máxime cuando no se presenta en debida forma, existió una oportunidad concreta para desarrollar el tema, que se agotó incluso al interponer el recurso, con pronunciamiento de fondo y con la confirmación del auto por parte de esta Sala. En los términos que establecen las

---

<sup>4</sup> Sala de casación civil 5 de octubre de 1939. GJ. XLVIII, 720

normas procesales, una nulidad, no constituye un reparo a la sentencia que desató la litis y en esos términos no será acogida.

El vicio alegado como constitutivo de nulidad relativa, la fuerza, se aduce que fue generada por parte del señor DIEGO PÉREZ el día 14 de diciembre de 2018 en el centro comercial Santafé de Medellín, cuando le hizo firmar a la señora SANDRA MILENA 6 letras de cambio allegadas como base de recaudo y que para garantizar el pago, le exigió la constitución de una hipoteca de primer grado por valor de \$150.000.000, lo que generó que ésta lo denunciara ante la Fiscalía donde además informó que por cuenta de la misma deuda, también fue amenazada e intimidada para traspasarle un vehículo de su propiedad el 21 de diciembre del mismo año. Agrega además que el señor DIEGO *"la amenazó con gente peligrosísima para la que él trabajaba, y que si no conseguía la hipoteca le iba a sacar a su familia de la casa y él sabía perfectamente dónde vivía ella con su familia"*.

En términos del código civil la fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. En ese caso, nos referimos a una violencia psicológica que la llevó a firmar los títulos base de recaudo; por eso es necesario hacer una valoración de los interrogatorios que absolvieron las partes para tratar de dilucidar si le asiste o no razón.

16. Analizando el material probatorio allegado, quedó establecido, según indicó en su interrogatorio el señor **DIEGO ALEJANDRO PÉREZ GIL** que *"la señora SANDRA ofrecía unos paquetes de inversión....ella ofrecía unos paquetes donde uno invertía una cantidad de dinero y eso daba rentabilidad al mes o a los 40 días como uno tomara el paquete... ella nos explicó que JOYERÍAS CANO O PRECOARTE, ellos compraron oro, lo legalizaban en zona franca, hacían joyas con este oro y lo vendían para el exterior, que en ese momento la empresa estaba descapitalizada y con tantos pedidos que tenía no tenían la forma de tener recursos monetario para comprar más oro... Empezamos en septiembre y duraron como 3 o 4 meses eso fue en el 2018. ....Sandra en las*

primeras negociaciones empezó a quedar bien con los pagos, ella decía, digamos este paquete lo desembolsamos el 20 de noviembre y ese día llegaba con la plata y al mismo tiempo nos ofrecía otros.... Con los tres primeros pagos quedó bien, ya después empezó a quedar mal... **ahí llamé a Sandra y le dije que como íbamos a organizar el dinero, ella me dijo sí, ya hablé con mi jefe y lamentablemente me toca a mí responder por la plata, pero en este momento no tengo forma, lo que puedo hacer es firmarle unas letras de cambio y unas garantías y me entregó un vehículo y lo otro se lo voy pagando y le dije que no había problema. Ahí fue donde se hicieron las letras....** Las letras se fueron haciendo a medida que los paquetes se fueron venciendo...”.

17. Al ser interrogada la señora **SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE** admite que tuvo relaciones comerciales con el señor DIEGO en la forma que éste lo indicó, pero que el problema surgió cuando ella empieza a incumplir y empieza a actuar bajo presión “él decía que no podía quedarle mal a las personas, es verdad él si lo dijo, una vez en san diego, donde me dijo: usted qué tiene para que empiece a pagar **y yo simplemente le dije tengo mi carro pues te lo dejo como garantía mientras se va agilizando el proceso...** . Cuando llego a entregar los documentos habían varias personas y se quedó otra persona en otra mesa... que supuestamente es un primo de él... me decía que estaba trabajando con personas delicadas y quería ayudarme para que no tuviera problemas... **no me estaba amenazando él directamente** porque supuestamente me estaba ayudando, pero siempre era esa presión, pero sí me decía entregue el vehículo y yo le decía no me puedo quedar sin mi vehículo porque prácticamente es de mi familia. .... Luego **me llamó otro señor de SANTA ROSA** donde me decían que entregara dinero porque iba a llegar diciembre y que le dijera como eran las cosas .. siempre me decían va gente muy peligrosa y te sacan tu familia, **él nunca me amenazó directamente, pero me decía trabajo con gente muy peligrosa...**” . PREGUNTADO. “Los dineros de esas letras, efectivamente se le debían al señor Diego.? R./esos son los mismos del contrato donde ponían el capital y de una vez la inversión, pero habían dineros que ya se habían liquidado, pero como estaban dentro del contrato vivo, volvían y se duplicaban con la inversión y se colocaban, o sea en la letra nunca se colocó el capital entregad , se colocó con ese interés inflado, eso fue en noviembre y las letras se firmaron en diciembre ...siempre era la presión...todas las letras se firmaron el mismo día y se les pusieron las fechas de los contratos, pero todas fueron firmadas el mismo día en el mismo lugar y estaba presente MANUEL ESPINAL .P/ pero los valores allí contenidos representaron tanto el capital como

la rentabilidad adeudada? R./ exactamente, pero no eran montos que se debían porque él no me entregó a mi ese capital... P/. entonces porqué firmó las letras: R/.por la presión que se generaba, que si yo no sabía quién era MANUEL ESPINAL, que si yo no sabía quiénes eran las personas delicadas con las que trabajaba y por eso firmé las letras ... de la misma manera entregué el carro y cuando entregué el carro me dijo que le tenía que entregar la escritura. P/ se habla de unas amenazas por parte del señor DIEGO, **entonces no eran amenazas de parte de él, según las aclaraciones que hace?** R/. **Yo lo tomo como una amenaza porque yo me lleno de miedo.** él jugaba conmigo, firme aquí, porque el sabía la naturaleza del negocio, él sabía de las condiciones y en el último negocio le dije, no puedo hacerlo porque mire como estamos y dijo, no importa, necesito que firme este contrato....”.

18. Con las versiones anteriores no es posible deducir ninguna clase de maltrato físico ni psicológico que hubiese obligado a la señora SANDRA a la firma de los títulos citados, no se advierte ninguna presión de ningún tipo ni el temor reverencial al que antes se aludió, lo cual se advierte de su propia declaración donde fue insistente en advertir que el señor DIEGO le manifestaba que la estaba ayudando y ella literal, se “llenaba de miedo”, que porque éste trabajaba con personas muy peligrosas, que de un lado no se determinó quienes eran y de otro, que ella mismo admitió que “**no me estaba amenazando él directamente** porque supuestamente me estaba ayudando”, no fue demostrado que existiera la amenaza que se esgrimió ni las constantes llamadas telefónicas que se le hicieron, porque a pesar de relacionar incluso los números telefónicos, de ello no hay constancia y además no puede desconocerse que también fue ella según se resaltó, la que le ofreció como garantía del pago que había incumplido, el carro que era de su propiedad: **me citaron en el centro comercial san diego y ahí quedamos en que yo le daba mi vehículo como parte de pago, luego me citaron en diciembre en Centro comercial Santafé ... para entregar los documentos de mi vehículo yo los radiqué en la notaría de san Lucas y los llevé...”** .

19. Para la Sala es claro que las negociaciones que se realizaron entre las partes, involucraron mucha cantidad de dinero, porque ambos indicaron que suscribieron alrededor de más de 10 contratos y eran negociaciones cuantiosas, pues según indicó el demandante *"para mí la intención de Sandra era llegar más allá, yo le estaba comprando paquetes de 40, 50, 60 millones pero ya en enero cuando se estaba destapando todo, me estaba ofreciendo paquetes de 600 millones, de mil millones de pesos, ya paquetes muy grandes que yo le decía que no tenía la capacidad para cogerlos"* y si a esto se agrega que según indicó la demandada era una utilidad equivalente a \$650.000 por millón, ello representa una suma bastante alta, que empezaron con pagos cumplidos y una vez surgido el incumplimiento por la parte demandada, como fue admitido, es casi natural que se le hubiese preguntado cómo se harían los pagos, incluso la suscripción de los títulos con los que se garantizaría este, máxime si se tiene en cuenta que el demandante indicó que es prestamista desde hace mas de 20 años y si bien dicha suscripción no lleva implícito la fuerza, si es claro que la prueba de las amenazas que se le endilgan al acreedor deben tener el soporte suficiente que lleven al convencimiento que se obró en forma indebida, contra su voluntad y que generaron el temor al que se alude. Y tampoco puede desconocerse que la demandada sí pudo haber enfrentado situaciones de angustia y temor por las deudas, porque también se afirmó que las personas a las cuales les había incumplido por negociaciones similares, eran alrededor de 10 más y todas le estaban cobrando, incluso la DRA. **SANDRA PATRICIA OROZCO B.** quien fue la abogada que inicialmente asesoró al demandante sobre los documentos que debía elaborar para respaldar las transacciones que hizo con la demandada cuando pretendió hacer inversiones mucho más grandes, manifestó que *"fueron más o menos 5 personas quienes solicitaron mi asesoría que al parecer la señora había empezado a incumplir los pagos y no les estaba dando respuesta... la señora se habría comprometido a algo y no les está cumpliendo... me reuní con ellos y me empezaron a contar, que empezó a incumplir, entre ellos mismos se comunicaban y encontraron anomalías y a raíz de eso fueron a enfrentarla como en un centro comercial y se dieron cuenta*



*que al parecer la empresa no tenía ni idea de lo que se estaba haciendo y que la señora no les iba a responder ... yo les dije aquí no hay nada que yo pueda hacer... sin ahondar en el tema.. se asimila a un tema de estafa o de captación ilegal... mi recomendación es que busquen un especialista en penal ... y hasta ahí supe”, pero ello no es suficiente para afirmar válidamente que fue amenazada por el demandante para la suscripción de los títulos y además la declarante indicó que varias personas fueron a reclamarle. Con todo, la señora Sandra admitió que le adeudaba el dinero al señor DIEGO, que recibió en su cuenta los dineros por parte de éste, que ofreció el vehículo como garantía, que buscó a una amiga para que le facilitara el inmueble para hipotecar la casa y al ser preguntada: *¿cuánto dinero le adeudaba al señor Diego al momento de suscribir esa prenda. R/. lo hicimos por esos 40 millones que eran para pagar a LUIS USUGA y al señor MANUEL ESPINAL... al señor Diego creo que en ese momento era el valor del último contrato . P./ tiene recibos de cancelación de parte del señor Diego de alguna suma de dinero. R/. lastimosamente no”* y además de lo anterior, los títulos como tal no fueron tachados de falsos, solo que se afirmó que no es la suma que se cobra, pero al ser preguntada igualmente, cual es la suma real que adeuda, no supo dar explicaciones porque indicó *“habría que revisar, porque se montaba y se inflaba con las utilidades...”**

20. Afirma el apoderado en la sustentación, que de haber valorado la prueba documental en conjunto se podría establecer que los títulos se suscribieron el mismo día, que se cobran 6 títulos por valor de \$274.500.000 y solo se allegaron 6 consignaciones y un recibo por \$175.600.000 sin contar que se acreditó que la demandada cumplió con los pagos los primeros 3 contratos de mutuo; abonó \$40.000.000 de un préstamo que nunca recibió relacionado con un vehículo y una hipoteca por valor de \$150.000.000 en favor de un tercero.

21. Lo primero a advertir es que en términos generales las letras de cambio allegadas cumplen los requisitos que las normas establecen para su validez, no siendo necesario hacer análisis adicionales al respecto porque si bien es cierto se presentaron excepciones, solo



estuvieron encaminadas a indicar que se firmaron por amenazas y no se atacó su contenido como tal con ninguna de las causales que establece el artículo 784 C Cio, ni siquiera las derivadas del negocio causal, ese tema fue pacífico y la obligación se admite. Ahora bien, el valor total que se cobra por \$274.500.000 es la sumatoria de las 6 letras citadas. Respecto a los contratos de mutuo que se allegaron, debe advertirse que en ellos claramente se indica que son negociaciones donde intervinieron como otorgantes los señores **MANUEL EDUARDO ESPINAL VALENCIA y DIEGO ALEJANDRO PÉREZ GIL** como otorgantes y de otro, la señora **SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE** actuando como coordinadora de operaciones de planta, obligándose **en nombre de PRECOARTE SAS**, por los valores que en cada uno se relaciona así: \$37.000.000, \$98.050.000 y \$45.050.000. Se allegan otros contratos donde aparecen los señores DIEGO PÉREZ Y MANUEL ESPINAL y de otro, el señor LUIS ALBERTO CANO BARON actuando **en nombre de PRECOARTE SAS** aludiéndose allí a las sumas de \$37.000.000 y \$16.000.000. En otro contrato se compromete solo el señor DIEGO ALEJANDRO PÉREZ como mutuante a entregar a PRECOARTE la suma de \$40.000.000, la suma de \$18.000.000, \$31.000.000. En cada contrato se establecieron las condiciones respectivas como objeto, modalidad de entrega, rentabilidad garantizada, duración, pago y otras cláusulas que los rigen en cada caso. Incluso se allegaron unas certificaciones expedidas por PRECOARTE SAS dando cuenta de dineros que invirtió el señor PÉREZ GIL y el valor de la utilidad correspondiente. Y debe tenerse presente que la obligación que aquí se cobra es directamente entre el señor PÉREZ GIL y la señora SANDRA MONTOYA como persona natural con ocasión de una deuda pendiente sustentada en las letras de cambio tantas veces citada, resaltándose además que ambas partes fueron claros en la celebración de varios negocios y se indica en el escrito de impugnación que *“se acepta la existencia de **negocios anteriores** consistentes en la celebración de unos contratos de mutuo...”*, que la

demandada incumplió y aunque se afirma que debieron ser cobrados a través de un proceso verbal, son apreciaciones que no son del resorte del proceso, en tanto es decisión de cada parte encaminar la demanda por los medios que considera acordes, tanto es así que en ellos se indica que prestan mérito ejecutivo y en el que nos ocupa, ya se ha indicado que por lo menos los que se allegaron involucran a sociedades que no son parte en este proceso; porque claramente se estableció *"cuando en el contrato aparezca Precoarte, **entonces se hacían a nombre de la empresa Precoarte y otros a nombre de Sandra Milena**"* y los títulos que son la base de recaudo, son letras de cambio que contienen el capital no pagado, que por sí mismas dan cuenta de la obligación donde aparece como deudora la aquí demandada.

22. Al plenario también fue allegado con fecha 21 de noviembre de 2018, un contrato de préstamo realizado entre el señor PÉREZ GIL con la señora SANDRA MONTOYA por la suma de \$40.000.000 y como garantía los documentos firmados en blanco para el traspaso del vehículo de placas FQQ-270 cuya propietaria es ésta última y que tiene prenda a favor de CARROFÁCIL DE COLOMBIA SAS, donde autoriza a su acreedor en caso de no pago de la suma de dinero, al pago de la prenda, levantamiento de esta y traspaso correspondiente, documentado debidamente autenticado, allegándose también la constancia de cancelación de la prenda. Y si bien en el escrito de impugnación se alude a dicha suma como un abono, no puede dejarse de lado que se aporta un documento que respalda ese préstamo y además el pago de la prenda por parte del demandante en cuantía de \$32.822.007,38 y al respecto la demandada adujo inicialmente *"me citaron en el centro comercial san **diego** y ahí quedamos en que yo le daba mi vehículo como parte de pago"* pero en la misma declaración al ser preguntada: *¿usted dice que el valor de la letras no coincide con lo adeudado porque se estaban incluyendo contratos que ya habían sido pagados, cuál es el valor real que usted le debe a Diego Alejandro?. R/. habría que revisar, porque se montaba y se inflaba con las utilidades.... MANUEL espinal hizo un contrato con una inversión de 20 millones **y se supone***

**que cuando se hizo lo del vehículo era para pagarle a él, porque él dijo: a mí me entregan los 20 millones** y ya, porque si no se puede dar la utilidad ... él dijo a mí me dan los 20 millones y ya **y por eso se hizo lo del carro para pagarle los 18 millones** y en el documento del vehículo se hizo por 40 millones"... lo hicimos por esos 40 millones que **eran para pagar a Luis Úsuga y al señor Manuel Espinal...** al señor Diego creo que en ese momento era el valor del último contrato..." y es por ello que dicha suma no es viable acogerla en los términos que se solicitan para acreditar un posible pago, cuando claramente se indica cuál era el objeto de la adquisición del vehículo. Igual sucede con la escritura de hipoteca en la que basta observar que según se indicó al sustentar las excepciones propuestas, con las amenazas por parte del señor DIEGO, buscó a una amiga para que le prestara su casa para hipotecarla, lo que efectivamente ocurrió, pero al analizar el contenido de la escritura, la señora NUBIA BETANCUR GIRALDO se constituye deudora del aquí demandante por la suma de \$150.000.000, el día 28 de diciembre de 2018, llamando la atención que según se indica, la señora BETANCUR GIRALDO firma contra su voluntad, pero se dirige a la notaría solo con la señora SANDRA, porque el demandante afirmó que él no estuvo; la escritura fue devuelta por errores de linderos el 30 de enero de 2019; el 14 de febrero de 2019 la señora NUBIA BETANCUR le solicita al notario se abstenga de autorizar la aclaración remitida por la oficina de registro aduciendo que no tiene deudas con el acreedor y que lo hizo para proteger a su amiga y en similares términos remitió una comunicación a la oficina de registro el día 25 de febrero de 2019, ante lo cual le fue suspendido el trámite por 30 días, pero finalmente se registró porque venció el término sin novedad diferente. En la actualidad se tramita el proceso hipotecario donde es demandante ANDRÉS FELIPE CABALLERO GARCÍA contra NUBIA BETANCUR GIRALDO. Solo el 29 de julio de 2019 la señora SANDRA MILENA MONTOYA presenta denuncia contra el señor PÉREZ GIL por constreñimiento ilegal y también se allegó una constancia de la Fiscalía con fecha 4 de octubre de 2019 certificando que se adelantan diligencias preliminares donde figura como denunciante

NUBIA DE JESÚS BETANCUR GIRALDO según hechos ocurridos el 30 de enero de 2019 por el delito de constreñimiento ilegal, no teniendo explicación lógica, el paso del tiempo para la denuncia, máxime que a la notaría comparecieron sin la presencia del demandante y que allí se afirma que el constreñimiento fue el 30 de enero de 2019 y la escritura de hipoteca ya se había suscrito el 28 de diciembre de 2018.

23. Y al margen de todo, no es viable acoger el supuesto pago alegado, cuando basta con mirar el escrito donde se propone la excepción y el interrogatorio de la demandada y de allí no se deduce que se establezcan cuentas claras, ni la demandada sabe cuánto debe, como para advertir que la obligación se extinguió con las transacciones que dice realizó; es más, esos detalles de los valores de los contratos que se celebraron entre las partes son claros solo en la denuncia ante la fiscalía, cuando se denuncia por el constreñimiento y se explica el origen de las negociaciones y es cierto que se allegaron además unas consignaciones en BANCOLOMBIA; en una se muestra una transacción por valor de \$32.803.905,91 donde se lee convenio CARROFÁCIL que al parecer corresponde a la suma que canceló el demandante por la prenda con la cual estaba gravada el vehículo y otra transacción por valor de \$18.000.000 que no se sabe a que corresponde.

24. Es claro entonces, que dentro del giro de la relación comercial que manejaban los señores PÉREZ GIL y MONTOYA MONSALVE existieron incumplimientos de pago por ésta última, ello fue admitido y la suscripción de las letras citadas, que no fueron tachadas de falsas, no habiendo sido demostrado que se hubiese ejercido la fuerza por parte del acreedor, ya que a pesar de las afirmaciones sobre las varias llamadas telefónicas que al parecer se hicieron al celular de la deudora intimidándola, de ello no hay constancia; se anunció la declaración de los testigos que darían cuenta sobre la forma cómo se aceptaron las letras y cómo fue el giro de éstas, pero

no fueron arrimados a pesar de que el despacho los decretó oportunamente; ni siquiera se procuró la práctica de la prueba oficio que también se decretó; con las pruebas allegadas, no fue posible deducir que la obligación que hoy se cobra, hubiese sido cancelada o abonada. Estamos en presencia de títulos valores que reúnen los requisitos del artículo 422 CGP, 621 y 671 del C. de comercio, en cuanto contienen obligaciones claras, expresas y exigibles; la obligación se encuentra pendiente de pago y el demandante está facultado para su cobro, además que existe claridad sobre quien es la deudora de la obligación, de donde se deriva que pesaba sobre la excepcionante la carga de acreditar la supuesta coacción al suscribir los títulos y como así lo dijo el A quo la sentencia de primera instancia será confirmada y dado el resultado del recurso, con condena en costas en esta instancia a la parte demandada.

## **V. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **VI. FALLA:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia apelada del 10 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso Ejecutivo instaurado por DIEGO ALEJANDRO PÉREZ GIL en contra de SANDRA MILENA MONTOYA MONSALVE.

**SEGUNDO.** Condenar en costas en ésta instancia a la demandada.



**TERCERO:** Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

## **NOTIFIQUESE**

**JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO**

Magistrado

*Firma escaneada exclusiva para acciones de tutela conforme al artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho*

**PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA**

Magistrada

**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

Magistrada

*Firma escaneada exclusiva para acciones de tutela conforme al artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho*